

Un compromiso para modernizar el marco laboral

M.Valverde, Madrid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, busca el respaldo de la patronal y de los sindicatos para mandar un mensaje de esperanza a la sociedad, ante la gravedad de la crisis económica. Por ello, Sánchez firmará hoy con los agentes sociales una declaración de intenciones *Por el Empleo y la Recuperación Económica* a corto y medio plazo. El acto de la firma se produce tras las estadísticas y los informes del Banco de España, el FMI y la OCDE, que pronostican una profunda recesión por la epidemia vírica. También es verdad que el

acuerdo social sobre un programa económico se produce una semana después de la histórica reunión de empresarios que celebró la CEOE. Así, muchas de las líneas de la declaración hablan de las demandas de los empresarios.

En primer lugar, el Gobierno se compromete a habilitar otros 50.000 millones de euros para ayudar a las pymes y a las grandes empresas en apuros (ver información en esta página).

En segundo lugar, el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos se comprometen a negociar la "modernización del marco laboral con el fin de

impulsar el empleo y hacer un seguimiento de los ERTE" actualmente en vigor, según las fuentes de la declaración, consultadas por EXPANSIÓN.

La reforma laboral

En ningún momento aparece la promesa del Gobierno PSOE-Podemos de derogar la reforma laboral, aprobada por el PP en 2012. Si acaso una referencia a la modificación de la negociación colectiva. Los empresarios no están de acuerdo con la derogación íntegra de la reforma laboral, pero sí están dispuestos a discutir sobre la negociación co-

La declaración evita derogar la reforma laboral para no contrariar a los empresarios

lectiva. Es muy importante también que la declaración habla "de hacer las adaptaciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones protegiendo el poder adquisitivo" de estas rentas. Hay que recordar que, habitualmente, es el Gobierno de turno el que, con la patronal y los sindicatos, pone las cifras concretas a

las líneas generales que establece la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo.

Por enésima vez, el Gobierno y los agentes sociales se comprometen a negociar un pacto para recuperar la industria, y su conversión medioambiental. Para elevar su peso hasta el 20% del Producto Interior Bruto (PIB). Ahora, con la energía, representa el 14%.

También, por enésima vez, el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos anuncian que lucharán contra la economía sumergida. CEOE calcula que la actividad oculta al Fisco y a la Seguridad Social evita unos

ingresos potenciales al erario público de 200.000 millones de euros al año. Los empresarios creen que el Gobierno debe perseguir este tipo de economía en lugar de subir los impuestos. El pacto defiende la digitalización económica y medidas para impulsar a los autónomos y a la economía social, que está formada por las cooperativas y sociedades anónimas laborales, entre otras. Además, los agentes sociales han arrancado el compromiso del Gobierno de agilizar el funcionamiento de las administraciones públicas: central, autonómica y municipal.